

I

La consulta recibida solicita emisión de informe acerca de la procedencia o no de la cesión masiva e indiscriminada del Padrón de Habitantes actualizado de la localidad de Guijuelo hasta el mes de noviembre del año 2025 a la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca. Dicha consulta trae causa, a su vez, de la petición recibida de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca del Padrón actualizado de Guijuelo (en su integridad y sin discriminación alguna) justificando ser necesario para las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de la Guardia Civil al amparo de la Ley Orgánica 4/2015 y de la Ley Orgánica 3/2018, sin concretar en modo alguno la referencia a investigaciones concretas y determinadas; dicha petición se fundamenta, según se indica, en el informe de esta Agencia número 133/2008, sobre solicitudes de datos por la Policía Judicial sin mandato judicial. A este respecto el Ayuntamiento consultante discrepa de la interpretación de dicho informe citado por la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca por considerar que de él resulta lo contrario de lo pretendido al imponer cumplir una serie de condiciones que se opondrían a dicha cesión de manera masiva e indiscriminada del padrón.

Sentados los términos de esta consulta conviene comenzar afirmando que, en efecto, estamos ante una cuestión, la relativa a la cesión masiva e indiscriminada de datos del padrón que viene siendo analizada por esta Agencia de manera reiterada desde hace décadas, tal y como vamos a ver a través de los informes que han sido emitidos a este respecto de forma sucesiva, sin que el cambio de normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sustituida por RDPD y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), haya determinado alteración alguna en la posición jurídica mantenida a este respecto.

Comenzando por el informe citado por la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca número 133/2008 en relación con la consulta planteada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en él se establece que:

“Resultará, en consecuencia, aplicable a este segundo supuesto lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”

El citado artículo habilita, a nuestro juicio, a los miembros de la Policía Judicial para la obtención y tratamiento de los datos requeridos, lo que llevará aparejada la procedencia de la cesión instada, siempre y cuando la Policía Judicial, cumplan las siguientes condiciones, que han sido reiteradas por la Agencia Española de Protección de datos:

- a) Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.*
- b) Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos.*
- c) Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto.*
- d) Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, los datos sean cancelados “cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”.*

Con referencia a la última de las conclusiones señaladas, debe indicarse que, tratándose de actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las competencias consagradas en el apartado a) del artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encontrándose por ello la Policía Judicial obligada a dar cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial y Fiscal de forma inmediata, deberá procederse a la destrucción del registro de los datos obtenidos, una vez producida esa comunicación.

A mayor abundamiento, debe recordarse que, conforme dispone el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, procederá la cesión si ésta tiene por destinatario al Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales, lo que, conforme se ha señalado, ocurre en el presente supuesto, dada la obligación de los miembros de la Policía Judicial de poner los datos que hayan sido obtenidos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente para conocer la denuncia o Fiscal. Por ello, la cesión solicitada tendrá amparo no sólo en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, sino también en el propio artículo 11.2 d) de la misma.

En virtud de todo lo cual, cabe concluir que procede la cesión de los datos que solicite la Policía Judicial, bien por aplicación del artículo 11.2 d), bien del artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, si bien, en este último supuesto, la solicitud deberá cumplir las condiciones manifestadas anteriormente”.

A la vista del fragmento que se acaba de transcribir debe confirmarse, tal y como indica el Ayuntamiento consultante, que se autoriza la cesión de datos a la Policía Judicial no de manera incondicionada sino con sujeción a las limitaciones que se enuncian en las letras a) a d).

Análogamente, vuelve a pronunciarse sobre la cesión de datos del padrón nuestro informe número 90/2010, con remisión a un anterior informe de 19 de julio de 2004, indicando lo que sigue:

“En primer lugar, en lo que se refiere a la comunicación de datos personales del Padrón a la Policía Municipal, es una cuestión sobre la que ya se ha pronunciado Agencia en sus diversos informes jurídicos, como el que se señala en la consulta, por ello la contestación se efectuará en los mismos términos y para ello traemos a colación el informe emitido el 19 de julio de 2004, en el que se señalaba lo siguiente:

“Con carácter general, debe indicarse que la comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Tal y como determina el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión. Por ello, deberá determinarse si la legislación reguladora de los ficheros a los que la consulta se refiere permite esa transmisión de sus datos.

Por otro lado, siendo el Padrón un fichero de titularidad pública, debe partirse, del principio de delimitación de la finalidad en las cesiones entre Administraciones Públicas consagrado por el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, al exigir que si los datos son cedidos a otras Administraciones Públicas sirvan sólo para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre materias semejantes, con la única excepción, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, de que el cambio de finalidad esté fundado en una de las causas contenidas en el artículo 11 de la propia Ley Orgánica, pudiendo ser sustituida la necesidad del consentimiento para el cambio de finalidad por una previsión realizada en una disposición con rango de Ley (art.11.2 a).

En cuanto al Padrón municipal, el artículo 16.3 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica

14/2003, de 20 de noviembre, dispone que “los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública”.

Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, tratándose de su supuesto de acceso a los datos del Padrón por parte de la Policía Local, el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señala que, “el mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, entre las que se incluyen, según el artículo 2 de la propia Ley “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación, los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales”.

Por tanto, a la vista de lo establecido en los preceptos citados, cabe deducir que será admisible la cesión solicitada por cualquiera de dichas policías, si bien quedando la misma limitada a los datos referidos al nombre, apellidos y domicilio, al ser éstos los únicos que la Ley de Bases de Régimen Local autoriza a transmitir, y para el uso derivado de la función de mantenimiento de la seguridad pública.

Además, la nueva Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducida por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, establece que “la Dirección General de la Policía accederá a los datos de inscripción padronales de los extranjeros existentes en los Padrones Municipales, preferentemente por vía telemática”, pero habilita dicha facultad únicamente “Para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y permanencia de extranjeros en España”.

La comunicación a la que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tiene encaje con lo previsto por el nuevo artículo 16.3 de la misma norma, al relacionarse dicha comunicación con las competencias establecidas en la Ley Orgánica de “extranjería”, sobre control y permanencia de extranjeros en España.

Así, es posible interpretar que la citada Disposición Adicional Séptima posibilita, de acuerdo con la Ley 15/1999, habilita las cesiones cuya finalidad sea la actualización del Registro Central de Extranjeros, la realización de comunicaciones administrativas que interesen a los residentes que hubiesen cambiado de domicilio sin comunicarlo, la localización de extranjeros solicitada por sus propias Embajadas o Consulados, o el conocimiento de que el extranjero tiene domicilio en territorio español a fin de evitar su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros.

En otro tipo de supuestos, podrán cederse a la Policía los datos contenidos en el Padrón Municipal, pero únicamente caso por caso y como consecuencia de la realización de una concreta actividad investigadora, dado que el artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999 establece, en su apartado 2 que “la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”.

Este criterio impediría el acceso o comunicación en bloque de la totalidad de los datos contenidos en el Padrón de Habitantes que es un fichero público del Ayuntamiento, siendo no obstante conforme a derecho la cesión concreta de determinados datos, debidamente individualizados, cuando se solicite en el marco de las competencias que tengan atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la cesión sea conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, así como en los supuestos en que la autoridad policial, en su condición de Administración Pública, precise conocer específicamente el domicilio de los afectados a los fines previstos en el artículo 16.3 de la Ley reguladora de la Bases del Régimen Local.

A la vista de lo antedicho, cabe concluir que, de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 15/1999, la Agencia Española de Protección de Datos entiende que no habría inconveniente para que en el ejercicio de funciones específicas se acceda a los datos contenidos en los ficheros municipales por parte de los efectivos de la Policía Local, siempre que:

- Se asegure que se utilizan únicamente aquellos datos que son adecuados, pertinentes y no excesivos;*
- La cesión se realice en el marco de expedientes concretos y con necesidades debidamente justificadas, relacionadas con las funciones propias de la Policía Local; y*
- Se garanticen la confidencialidad y seguridad de los datos personales.*

Por consiguiente, el acceso o comunicación de los datos que permite el artículo 16.3 de la Ley de Bases de Régimen Local deberá ir presidido por una petición en la que pueda quedar identificado el funcionario o responsable de la policía que efectúa la petición e identificada la finalidad concreta, es decir, la actuación de seguridad pública concreta para la que se necesitan los datos del domicilio o residencia de los afectados.

Teniendo en cuenta el criterio sentado por la Agencia en anteriores informes, como el adjuntando y el señalado en la consulta, hemos de concluir que no procede efectuar una cesión masiva de los datos de todos aquellos extranjeros no comunitarios inscritos en el Padrón Municipal, dado que no hay ley que habilite la cesión y no concurre ninguno de los supuestos fijado anteriormente para hacer efectiva la cesión”.

Como se puede observar es criterio reiterado de esta Agencia ya desde el año 2004 que la cesión de datos del padrón no podrá hacerse de manera masiva o indiscriminada sino caso por caso y como consecuencia de la realización de una concreta actividad investigadora, y con sujeción a determinados límites impuestos por la normativa en materia de protección de datos personales tales como: que se recaben los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos; realizar la cesión en el marco de expedientes concretos y con necesidades debidamente justificadas y garantizando la confidencialidad y la seguridad de los datos personales.

Con posterioridad a estos informes tuvo ocasión de pronunciarse a este respecto el Tribunal Constitucional en su sentencia 17/2013, de 31 de enero, en cuyos fundamentos 7 y 8 se expone una doctrina contraria al tratamiento masivo de datos personales por las Administraciones Públicas, tal y como recoge y analiza nuestro informe número 43/2023, sobre la base ya de la normativa actualmente vigente en materia de protección de datos personales contenida en el citado RGPD y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el cual transcribimos parcialmente a continuación:

“Sin perjuicio de la transcrita previsión legal, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional contraria al tratamiento masivo de datos personales por las Administraciones Públicas, recogida con claridad en su Sentencia 17/2013 de 31 de enero de 2013, en sus Fundamentos Jurídicos 7 y 8.

Señala el FJ7, referido al acceso por parte de los órganos competentes en materia de extranjería a los datos obrantes en poder de otros órganos administrativos:

En cuanto al segundo párrafo de la disposición adicional impugnada, el mismo autoriza a los órganos de la Administración estatal, competentes en el ámbito de los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito que regula la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros y solamente en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, para acceder a los

ficheros en los que obren datos necesarios para su actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este último en lo relativo al padrón municipal de habitantes, lo cual ha de realizarse de acuerdo con la legislación sobre protección de datos sin que sea preciso el consentimiento del interesado. Al respecto, conviene hacer notar que la mención del precepto a los procedimientos administrativos tramitados en el ámbito de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros no puede entenderse sino haciendo referencia a la tramitación de un determinado expediente en el que resulta necesaria la constancia de determinado dato que ya obra en poder de otro órgano de la Administración General del Estado, tratándose así de un acceso específico en cada caso ajustado a los datos que resulten precisos para la tramitación de un expediente determinado y no de un acceso masivo o indiscriminado. La finalidad de esa cesión no es otra que comunicar el contenido de ficheros con datos tributarios, de Seguridad Social o de residencia, datos que, en cualquier caso, son ya previamente conocidos por la Administración General del Estado, atendiendo a la necesidad de que la misma disponga de la información oportuna para la gestión de procedimientos en materia de extranjería que son también de su competencia. Por ello, en la medida en que han de tratarse de datos relacionados con un concreto procedimiento y que ya obran en poder de la Administración pública, no puede considerarse vulnerado el art. 18.4 CE. En todo caso, como ya hemos señalado, tal acceso solamente puede producirse cuando ese dato resulte necesario o pertinente en relación con la tramitación de un concreto expediente, lo que permite analizar o determinar en cada caso la conformidad del acceso con lo establecido en el régimen legal que le resulta de aplicación. Así, rectamente interpretada en los términos antes expuestos, resulta que esa cesión de datos que el acceso previsto supone ha de realizarse de acuerdo con lo que al respecto disponga la Ley Orgánica de protección de datos lo que determina, no solamente la aplicación de lo que la misma dispone en materia de información al interesado respecto de la cesión de datos (art. 5.4 LOPD), sino también que la cesión, establecida en una norma legal [art.11.2 a) LOPD], se produce para el cumplimiento de finalidades legítimas del órgano cedente y del cesionario (art. 4.1 LOPD), finalidades que, desde el punto de vista material, no resultan ser incompatibles entre sí (art. 4.2 LOPD), sino que, por el contrario, los datos son comunicados para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario que contribuyen a garantizar un bien de relevancia constitucional: dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley, en este caso la de extranjería (arts. 10.1 y 13.1 CE).

Asimismo, en su FJ 8, interpreta el artículo 16.3 de la Ley de Bases de Régimen Local para determinar la constitucionalidad del mismo. Tal y como ha sido interpretado por el TC en dicha sentencia (FJ 8), este precepto se

refiere a la cesión no consentida de los datos relativos a la residencia o el domicilio a otras Administraciones públicas que así lo soliciten solamente en aquellos casos en los que, para el ejercicio de sus competencias, sean aquellos datos relevantes. En suma, esta petición, que no se refiere específicamente a la cesión de datos del padrón en lo concerniente a los datos de los extranjeros, tiene por finalidad poder disponer de los datos relativos a la residencia o el domicilio que constan en el padrón municipal, (...). De esta forma, de acuerdo con la Ley Orgánica de protección de datos, la finalidad inicial que justificó la recogida de los datos por parte de una Administración pública no impide el destino posterior de los datos para su uso en finalidades diferentes de aquellas que motivaron su recogida respetando, en todo caso, el principio de reserva de ley para establecer dicho cambio, (...) la Ley de bases de régimen local en su condición, además, de norma reguladora de un fichero como el padrón municipal puede prever cesiones de datos entre Administraciones públicas.

(...) los datos cedidos han de ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a los órganos administrativos de forma que deberá motivarse la petición de aquellos datos que resulten relevantes, pues es necesario distinguir entre el análisis y seguimiento de una situación individualizada relativa a un caso concreto y el suministro generalizado e indiscriminado de toda la información contenida en un registro personal. El precepto ha contemplado ambos extremos de manera que cualquier cesión de los datos del padrón debe fundamentarse en la necesidad por parte de la Administración cesionaria actuando en el ejercicio de sus competencias, de conocer, en cada caso concreto, el dato relativo al domicilio de la persona afectada, extremos que han de ser adecuadamente valorados por la cedente a fin de apreciar si los datos que se solicita son realmente necesarios, pertinentes y proporcionados, atendiendo a la competencia que pretende ejercer la Administración cesionaria (art. 4 in fine de la Ley 30/1992). Se trata así de una regla de por sí restringida a los datos relativos a la residencia y al domicilio en cada caso concreto, y a la que le resultarán de aplicación, de más está decirlo, el resto de principios y previsiones que conforman el contenido del derecho reconocidos en la legislación sobre protección de datos.

De lo anteriormente transcrito, y del resto de la fundamentación jurídica contenida en dicha sentencia resulta que el TC ha determinado que (i) habrá de evitarse el acceso indiscriminado y masivo a los datos personales (ii) el dato en cuestión solicitado habrá de ser pertinente y necesario (iii) para la finalidad establecida en el precepto (iv) la solicitud de acceso a los concretos datos personales habrá de motivarse y justificarse expresamente, (v) de manera que ello posibilite su control por el cedente (vi) y se evite un uso torticero de esa facultad con accesos masivos. Ello supone (vii) que ha de quedar garantizada la posibilidad de analizar si en cada caso concreto el acceso tenía amparo en lo establecido en la ley.

Por consiguiente, no cabe un acceso masivo e indiscriminado a datos personales, y por lo tanto, en cambio, cuando exista la posibilidad de cesión establecida en una ley, como ocurre en el presente caso, dicho acceso deberá ser siempre “específico en cada caso ajustado a los datos que resulten precisos para la tramitación de un expediente determinado y no de un acceso masivo e indiscriminado”; “tal acceso sólo podría producirse cuando ese dato resulte necesario o pertinente en relación con la tramitación de un concreto expediente, lo que permite analizar o determinar en cada caso la conformidad del acceso con lo establecido en el régimen General que le resulte de aplicación.” (STC 19/2013, FJ 7º).

Consecuentemente la previsión legal del art. 22 quater de la Ley Orgánica 1/1996 no supone una habilitación genérica para la comunicación a la autoridad administrativa autonómica de todos los datos personales que puedan figurar en los ficheros policiales respecto del progenitor de un menor incurso en un procedimiento de posible declaración de la situación de desamparo, sino únicamente de aquellos datos que sean estrictamente necesarios en el seno del procedimiento tramitado por la autoridad autonómica para la adecuada protección de los menores por los poderes públicos mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, para la asunción de la tutela por ministerio de la ley.

De este modo, el requerimiento de tales datos por la Administración competente solamente podrá efectuarse cuando exista una situación comprobada de riesgo de exclusión social o desamparo del menor, lo que deberá ser suficiente y expresamente motivado y razonado por la Administración requirente.

En segundo lugar, la comunicación de datos que se efectúe estará sujeta al principio de minimización de datos, recogido en el artículo 5.1.c) del RGPD, según el cual los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, sin que se ampare las cesiones masivas de datos, quedando limitada a los datos necesarios para la determinación de la medida o medidas que en favor del menor en situación de exclusión o de riesgo vayan a aplicarse.

En tercer lugar el tratamiento de los datos así obtenidos estará sujeto estrictamente al principio de finalidad consagrado en el artículo 5.1.b) del RGPD, conforme al cual los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines[...].

Por último, conforme al régimen de responsabilidad proactiva instaurado por el RGPD, la Administración autonómica deberá garantizar la aplicación de las medidas

técnicas y organizativas que resulten de la correspondiente evaluación de impacto en la protección de datos, en los términos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad”.

Extrapolando esta reiterada doctrina al caso que nos ocupa debemos indicar que la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, sobre la que se ampara la Comandancia de la Guardia Civil solicitante de los datos dispone en su artículo 4.1 que: *“Será autoridad competente, a los efectos de esta Ley Orgánica, toda autoridad pública que tenga competencias encomendadas legalmente para el tratamiento de datos personales con alguno de los fines previstos en el artículo 1.*

En particular, tendrán esa consideración, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes autoridades: a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Añadiendo su artículo 6 en materia de principios relativos al tratamiento de datos personales que: *“1. Los datos personales serán:*

- a) Tratados de manera lícita y leal.*
- b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados de forma incompatible con esos fines.*
- c) Adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados.*
- d) Exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen, sin dilación indebida, los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que son tratados.*
- e) Conservados de forma que permitan identificar al interesado durante un período no superior al necesario para los fines para los que son tratados.*
- f) Tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Para ello, se utilizarán las medidas técnicas u organizativas adecuadas”.*

Y estableciendo su artículo 7 el deber de colaboración en los siguientes términos (el subrayado es nuestro):

“1. Las Administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, proporcionarán a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial

los datos, informes, antecedentes y justificantes que les soliciten y que sean necesarios para la investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. La petición de la Policía Judicial se deberá ajustar exclusivamente al ejercicio de las funciones que le encomienda el [artículo 549.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio](#) y deberá efectuarse siempre de forma motivada, concreta y específica, dando cuenta en todo caso a la autoridad judicial y fiscal.

La comunicación de datos, informes, antecedentes y justificantes por la Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se efectuará de acuerdo con su legislación respectiva”.

Por lo expuesto, inclusive en los casos, como el que ahora analizamos, en los que el legislador ha habilitado específicamente este deber de colaboración, no será posible un acceso masivo e indiscriminado, sino que incluso existiendo legalmente la posibilidad de ceder datos dicho acceso deberá ser siempre: “específico en cada caso ajustado a los datos que resulten precisos para la tramitación de un expediente determinado y no de un acceso masivo e indiscriminado”; “tal acceso sólo podría producirse cuando ese dato resulte necesario o pertinente en relación con la tramitación de un concreto expediente, lo que permite analizar o determinar en cada caso la conformidad del acceso con lo establecido en el régimen General que le resulte de aplicación.” (STC 19/2013, FJ 7º).